

Pronunciamiento de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y la Mesa permanente de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes de la PDDH, ante la detención de Niñas, Niños y Adolescentes y su separación de sus padres o responsables en la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica, como parte de la medida “Tolerancia Cero”

A partir de la información vertida por los diferentes medios de comunicación nacional e internacional, se conoció que las autoridades de inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica, han privado de libertad y separado de sus madres, padres o responsables a niños, niñas y adolescentes inmigrantes, en su intento por cruzar la frontera sur de forma irregular.

En las últimas dos administraciones del gobierno de los Estados Unidos, se han generado dos crisis humanitarias migratorias, en donde niñas, niños y adolescentes han sido los principales afectados. como parte de la medida ejecutiva impulsada por la administración del presidente Donald Trump, denominada “Tolerancia Cero”, que afecta a miles de familias inmigrantes de la región Centroamericana y otros países. Dicha medida no contempla la observancia y cumplimiento Interés Superior del Niño, así como del principio de no devolución, consignados en su propia legislación y en el marco normativo internacional.

Ante ello, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, acompañada de las organizaciones que conforman la Mesa permanente de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes de la PDDH, expresamos nuestra **preocupación, indignación y condena**, ya que se estima que pueden haber aproximadamente 2,324 niños, niñas y adolescentes, acorde a cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los más de 2 mil niños, niñas y adolescentes, que han sido separados de sus familias, aproximadamente 145 son de nacionalidad salvadoreña, en su mayoría menores de 12 años.

Según las noticias, nuestras niñas, niños y adolescentes han sido encerrados en jaulas, mientras sus padres o responsables son llevados a Cortes Federales para enfrentar cargos penales, y como es lógico, sus condiciones de encierro no permiten atenderles integralmente de ninguna forma, y generan estragos emocionales que vulneran sus derechos. La vulneración a la que están siendo sometidos representa una clara violación a los principios fundamentales del Interés Superior del Niño y Niña, así como el de Supervivencia y Desarrollo, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según las declaraciones emitidas tanto por la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, como por el Fiscal General de ese país, Jeff Sessions, esta situación se encuentra justificada en razón de que las personas encerradas han infringido las leyes migratorias de los Estados Unidos, por lo que no merecerían ninguna consideración. Se trata de un claro reflejo de la visión inhumana, lesiva de la dignidad, discriminatoria y de total vulneración a los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia reconocidos universalmente.

Ante esta crisis, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones e instituciones defensoras de los derechos de niñas, niños, adolescentes y juventudes en El Salvador, consideramos urgente:

- a) Instar a las autoridades del Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Instituto Salvadoreño de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y demás instituciones públicas con competencia en la protección de los derechos de la niñez, tanto de El Salvador como de la región Centroamericana y México, a que exijamos el cumplimiento y garantía de las normas universalmente reconocidas, que obligan a todos los Estados, principalmente a las autoridades migratorias, a asegurar a la niñez migrante el respeto de su dignidad y de sus derechos más básicos.
- b) Hacemos un llamado a la sociedad norteamericana para promover un debate responsable a favor de una reforma migratoria, que posibilite la regularización de las personas que hoy se encuentran de manera irregular; recordando que las personas migrantes y refugiadas contribuyen al desarrollo económico, social y político de su país.
- c) Hacemos un nuevo llamado, para que los países de origen generen las condiciones a través de políticas públicas para que las personas migrantes ejerzan su derecho a no migrar. Si bien hace cuatro años se elevó a nivel de agenda política el tema de niñez y adolescencia migrante y refugiada, no vemos avances en la comprensión de esta dinámica, así como en la puesta de acuerdo para la construcción de lineamientos y protocolos de atención y protección en los procesos de repatriación; si bien, este es un comienzo, hace falta mucho para garantizar la atención y protección de esta población en su origen, tránsito, destino, retorno y reinserción.
- d) Hacer un vehemente llamado a la señora Embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, señora Jean Manes, a que traslade de manera urgente a las autoridades competentes de su país, nuestra petición de, que por razones humanitarias y respeto al Derecho Internacional, se brinde asistencia especializada médica y psicológica a los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias, o se permita que



organizaciones civiles humanitarias lo realicen. Debe garantizarse el debido proceso y con ello garantizar que se mejore las condiciones de estancia en lugares apropiados para niños, niñas y adolescentes, privilegiando el respeto del interés superior que demanda la Convención de los Derechos del Niño.

- e) Instar particularmente a la Cancillería de la República a que intervenga de manera pronta y enérgica ante las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, para que se atienda esta grave situación desde un enfoque de derechos humanos y no desde la óptica de la persecución criminal de personas, quienes sólo buscan mejores condiciones de vida. Debe recordarse la existencia de pautas y lineamientos adecuados de orientación política y práctica para contribuir a la protección y bienestar de los niños y niñas, según la resolución 64/142 denominada “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de febrero del 2010.
- f) Solicitar encarecidamente al Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante (CONMIGRANTES) a asumir su rol de ente rector de la política migratoria de nuestro país y que de manera efectiva diseñe y proponga medidas para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Recordamos a las entidades que integran el CONMIGRANTES su mandato de articularse como instituciones del Gobierno de la República para incidir en la búsqueda de alternativas.

San Salvador, 27 de julio de 2018

